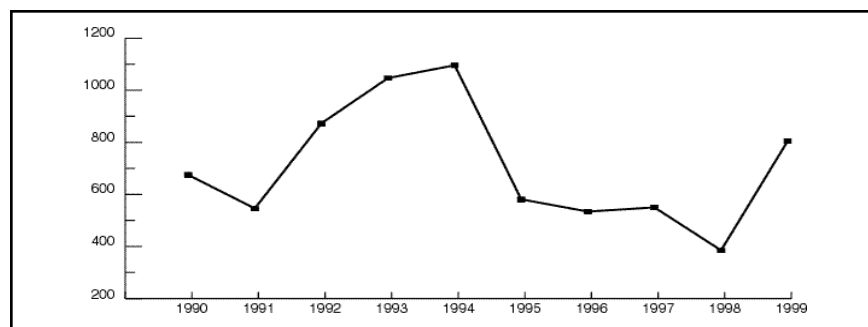


# Capítulo 1

## La protesta de los '90

La última década del siglo XX venezolano se distinguió por la sorprendente vitalidad de la movilización popular callejera en sus principales ciudades, de manera muy especial en Caracas, la capital y asiento de los poderes públicos. Este fenómeno evidenció la activación de una *política de la calle*, es decir, de una peculiar forma de relación y negociación entre diversos sectores sociales y el poder. Según la organización civil de derechos humanos Provea, en los diez años que transcurren entre octubre de 1989 y septiembre de 1999, hubo un promedio no menor a 2 protestas diarias en Venezuela (7.092 protestas en total), correspondiendo la etapa de mayor movilización a los años entre 1993 y 1995, que fueron de crisis política, y al año 1999, cuando la protesta se reavivó por el acceso al poder de una nueva alianza de fuerzas (Gráfico y Cuadro 1). Estos datos de Provea no incluyen las decenas de paros laborales realizados por los empleados públicos en estos años, una de las formas de protesta que más afectó las rutinas de esta sociedad.

Gráfico 1  
Total de protestas según Provea 1989-1999



Nota: las protestas contabilizadas anualmente por Provea son las ocurridas desde octubre del año previo hasta septiembre del año siguiente.

Cuadro 1  
**Total de protestas según Provea 1989-1999**

Años	Total de protestas
octubre de 1989 a septiembre de 1990	675
octubre de 1990 a septiembre de 1991	546
octubre de 1991 a septiembre de 1992	873
octubre de 1992 a septiembre de 1993	1.047
octubre de 1993 a septiembre de 1994	1.096
octubre de 1994 a septiembre de 1995	581
octubre de 1995 a septiembre de 1996	534
octubre de 1996 a septiembre de 1997	550
octubre de 1997 a septiembre de 1998	385
octubre de 1998 a septiembre de 1999	805
<b>Total de la década</b>	<b>7.092</b>

Fuente: Provea, *Situación de los derechos humanos. Informe anual* (años respectivos).

La alteración de la conducta sociopolítica del venezolano común y corriente, quien hasta los años ochenta fue considerado dentro de la región latinoamericana entre los menos propensos a la movilización, insinúa cambios de alguna importancia en el funcionamiento de la sociedad, muy especialmente en lo que tiene que ver con las relaciones entre el poder y los diversos sectores sociales. Es de destacar que no sólo aumentaron en estos años considerablemente las protestas callejeras y los paros laborales, sino que las formas de protesta más comunes también cambiaron, así como la naturaleza de la protesta, que se hizo más confrontacional y violenta. Los actores más visibles en estas acciones colectivas también llaman la atención: en algunos casos son totalmente nuevos en estos menesteres, mientras en otros casos son actores viejos que ahora actúan por su cuenta, desprendidos de los partidos políticos que los habían orientado y/o mediatizado por décadas. Por otra parte, como veremos en este trabajo, las motivaciones explícitas y las formas de fundamentarlas revelan demandas de modernización que la sociedad había formulado desde la primera mitad del siglo y que siguen sin ser satisfechas, pero a su vez ponen al descubierto una apropiación de imágenes e ideas sobre la sociedad deseable para el siglo XXI, que permite sopesar algunos de los logros alcanzados por esta sociedad en el tiempo.

En los estudios que han intentado dar cuenta de la emergencia y persistencia del llamativo fenómeno de la protesta a lo largo de la década, se ha sostenido usualmente que obedece a una causalidad compleja. En algunos casos, se pone el acento en los procesos de la globalización impulsados desde el contexto internacional, que han actuado como los iniciadores de una transformación social especialmente violenta y dolorosa para la sociedad venezolana (Coronil y Skurski, 1991; Walton y Seddon, 1994; Roberts, 2001). En otros, el fenómeno ha sido explicado desde factores estructurales y coyunturales propios o específicos

de dicha sociedad (Hillman, 1994; Coppedge, 1994). La activación sostenida de la protesta suele ubicarse a partir del *Sacudón*, una revuelta popular de vastas proporciones ocurrida en 1989, a partir de la cual se abrió un franco proceso de pérdida de legitimidad de las instituciones políticas de la sociedad (López Maya, 1999; Salamanca, 1999), y una ruptura del discurso oficial de unión y armonía que servía de cemento a la nación (Coronil y Skurski, 1991). Sin embargo, ya en los años ochenta se observaba el incremento de la movilización (Hillman, 1994). En cualquier caso, el *Caracazo*, los golpes de estado fallidos de 1992, la crisis política de 1993, los cambios en la conducta electoral de los venezolanos durante los comicios de la década, y las nuevas alianzas políticas que han alcanzado el control sobre el poder en los últimos cinco años, son indicios contundentes de una lucha por la hegemonía que se libra en la sociedad, de la cual la protesta popular, que guarda las características de un ciclo, según la definición de S. Tarrow, es un elemento importante (Tarrow, 1996: 153-157)<sup>1</sup>.

En efecto, dentro de esa lucha política, los sectores más débiles, es decir, la vasta masa de venezolanos pobres o empobrecidos por más de veinte años de recesión económica y de achicamiento de los ingresos fiscales, con la consiguiente disminución de los recursos para políticas sociales y un incremento en el desempleo, buscan afanosamente su inclusión. Estos sectores se han encontrado en los noventa huérfanos de canales de mediación y representación efectivos que garanticen el acceso de sus demandas y aspiraciones al espacio donde las decisiones son tomadas. Los partidos policlasistas y los sindicatos de la democracia de 1958, que sirvieron en otros tiempos para la representación y mediación de muchos de estos sectores, fueron quedando cada vez más rezagados, convertidos en maquinarias electorales al servicio de élites económicas y políticas, y desprestigiados por continuas y escandalosas denuncias de corrupción entre sus dirigentes. Por otra parte, sin duda, el declive económico y la implementación de políticas de ajuste de naturaleza neoliberal han alterado también todos los órdenes de la vida social, transformando la economía, trastocando las estructuras sociales características de la primera modernización, y debilitando los actores y procedimientos institucionales para el procesamiento de las demandas y conflictos en el aparato del Estado (López Maya y Lander, 2000[a]). En este contexto, la protesta de la calle se ha generalizado como canal de emergencia y es usada hoy con profusión por diversos sectores sociales de distintos niveles de ingresos y educación. Sin embargo, y a diferencia de grupos o actores sociales que disponen de ésta y otras opciones, para los sectores pobres y empobrecidos la protesta es casi el único medio efectivo que tienen a su alcance para interpelar al poder.

En las próximas líneas destacamos un conjunto de aspectos de la reciente protesta de los sectores populares, que permite poner en contexto los *marcos de acción colectiva* usados en las movilizaciones de 1999. En primer lugar, describimos el evento conocido como el *Caracazo* o *Sacudón*, punto de partida de un declive del sistema político venezolano instaurado en 1958 que probó ser irreversible, e inicio de un proceso que reconocemos como un *ciclo* de protestas, por el aumento numérico de éstas y por la generalización de formas de acción colectiva poco convencionales y en algunos casos novedosas (López

Maya, 1999). En segundo lugar, elaboramos una breve caracterización de la protesta popular desarrollada en los noventa, enfocando en sus formas, naturaleza de las acciones y actores, lo que permitirá que el material que analizamos más adelante, que procede de este tipo de protestas, sea mejor apreciado. Finalmente, exponemos la situación sociopolítica general de 1999, cuando la llegada al poder del teniente coronel (r) Hugo Chávez Frías propició, una vez más en la década, la intensificación de la *política de la calle*.

### **El Sacudón, o cuando la gente salió a la calle y ya no regresó<sup>2</sup>**

En la década del '80, especialmente a partir del gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989), los mecanismos de resolución de conflictos y mediación de intereses entre el Estado y la sociedad comenzaron a evidenciar signos crecientes de erosión. Los cuestionamientos a los partidos se multiplicaron, las denuncias de corrupción a funcionarios públicos comenzaron a proliferar, y se hacían cada vez más frecuentes y generalizadas las críticas al papel desempeñado hasta entonces por el Estado. Simultáneamente, comenzó a crecer la protesta callejera, especialmente la estudiantil (Hillman, 1994: 95-114). Ella era ejercida también por algunos otros de los actores tradicionales, sindicatos y gremios, pero destacaba la emergencia de actores diferentes y/o independizados de los institucionales<sup>3</sup>. Al iniciarse el segundo gobierno de Pérez (1989-1993), se va a producir un cambio cualitativo así como cuantitativo en la protesta. Al anunciarse la aplicación de un primer programa de ajuste macroeconómico *ortodoxo*, de acuerdo con las pautas del Fondo Monetario Internacional, estalla primero la revuelta popular del 27 de febrero de 1989 y los días siguientes, y luego se abre una espiral de protestas que con altas y bajas, y peculiares características, hasta la fecha aún continúa.

El lunes 27 de febrero comenzó a operar en todo el país el 10% de incremento del precio de la gasolina y el 30% de aumento de las tarifas del transporte colectivo, primeras medidas del *paquete* macroeconómico del recién inaugurado gobierno de Pérez. Éstas tenían como particularidad que afectaban de manera directa el bolsillo de todos los venezolanos. A primera hora de la mañana, comenzaron las primeras protestas en algunos puntos neurálgicos del transporte colectivo suburbano de la ciudad capital. En la terminal del Nuevo Circo de Caracas, lugar principal de recepción de quienes vienen de los suburbios y ciudades dormitorio, y en la parada del transporte colectivo para Caracas de ciudades dormitorio como La Guaira, Catia La Mar y Guarenas, antes de las seis de la mañana comenzaron a protestar usuarios, entre ellos muchos estudiantes. En todos estos sitios los choferes intentaban cobrar un aumento de tarifa por encima del 30% acordado por sus gremios con el Ministerio y los usuarios se resistían (*El Universal*, 28-02-1989: 1-26). Así mismo, protestas por el aumento de los pasajes se estaban dando también esa mañana en las ciudades principales de Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida, Maracay, Barcelona, Puerto La Cruz, Los Teques, Puerto Ordaz y Maracaibo. En la tarde también se reportaron disturbios en Valencia, Carora, Acarigua y Ciudad Guayana.

Estas protestas, primero en la forma de agresivos intercambios verbales entre choferes y usuarios, especialmente estudiantes, dio paso en algunos lugares con cierta rapidez a acciones colectivas confrontacionales y violentas. Hacia mediodía se estaban produciendo ya concentraciones, cierre de vías, quema de neumáticos y apedreamientos a ventanas de carros o vidrieras de establecimientos comerciales por parte de multitudes que iban creciendo. A las siete y media de la mañana en la ciudad dormitorio de Guarenas, adyacente a Caracas, ya una multitud había comenzado el incendio y saqueo a uno de los centros comerciales del suburbio. Esto se extendería después a la capital y a otros suburbios y ciudades.

Uno de los datos más distintivos del día lunes 27 es que a lo largo de él, las instituciones encargadas de la regulación y supervisión de la vida cotidiana, y de la mediación y representación de las relaciones entre sociedad y Estado, parecieron desaparecer. El gobierno nacional no dio muestras ese día de tener conocimiento de lo que ocurría, pues no ejerció ninguna de sus facultades para canalizar o controlar la situación: la policía no apareció en los lugares donde se estaban produciendo las protestas y los disturbios, o aparecía diciendo que tenía órdenes de no intervenir; los partidos y sindicatos no se hicieron presentes en ningún espacio de protesta. Hacia las 6 de la tarde, los que protestaban, ya un número considerable y extendido en toda la ciudad capital, habían bloqueado las principales arterias del tránsito, y el Metro de Caracas había cerrado sus puertas. Comenzaban a extenderse los saqueos por todas partes, continuando sin interrupción toda la noche del lunes 27 hasta la mañana del martes 28. Mientras tanto, la revuelta se había también generalizado prácticamente a todo el mapa urbano del país, con tomas por parte de multitudes de las principales arterias del tránsito de las ciudades, quemas y saqueos a las áreas comerciales con sus tiendas de alimentos, electrodomésticos, ferreterías y demás comercios. Entre las consignas que se oían y quedaban escritas en las paredes de las calles estaban: "El pueblo tiene hambre", "El pueblo está bravo", "¡Basta de engaño!" (Coronil y Skurski, 1991: 315). En algunos casos se ondeaban banderas y se cantaba el himno nacional al irrumpir en los establecimientos. También se vieron grupos armados, algunos incluso con los uniformes de policía y los rostros ocultos tras pañuelos, que llegaban con camiones a llevarse mercancías completas de una tienda.

Fue sólo después del mediodía del martes 28 cuando el gobierno, a través del ministro de Relaciones Interiores, se dirigió por primera vez a la población para llamar a la calma y anunciar, obviamente a destiempo, que no permitiría la violencia (Sanín, 1989: 27-29). Esta alocución televisada tuvo escaso efecto para tranquilizar o frenar las acciones colectivas, pues antes de terminar el ministro sufrió un desfallecimiento, lo cual ocasionó que la alocución fuera suspendida una primera vez para intentarse de nuevo un tiempo más tarde, sin que se le dieran a la población explicaciones claras sobre lo ocurrido más allá de que el ministro había sufrido una baja de tensión. Así, la sensación de incertidumbre política más bien se acrecentó. Poco antes de las seis de la tarde, se produjo una cadena nacional de los medios de comunicación y el presidente Pérez en compañía de su gabinete declaró la suspensión de un conjun-

to de garantías constitucionales y el estado de sitio de seis de la tarde a seis de la mañana en los próximos días.

Con el toque de queda, la revuelta comenzó a ceder empujada por una represión atroz –que violó toda normativa de un estado de derecho– que se desató contra la población, sobre todo contra los habitantes de las barriadas populares de Caracas. Esta represión ya se había manifestado en ciertas zonas de la ciudad durante el día, pues el ejército estaba ese día desde temprano en la calle, pero se intensificó en la noche y los días siguientes. Las distintas policías y el ejército se ensañaron contra los vecinos y transeúntes en los barrios populares, especialmente durante las horas del toque de queda. Al finalizar las jornadas, hacia el sábado 4, los muertos habrían alcanzado una cifra cercana a los cuatrocientos, la mayoría de los cuales eran civiles ejecutados por el ejército (Ochoa Antich, 1992; Base de Datos del Centro de Estudios para la Paz, 1999). Los heridos se contaron por miles y las pérdidas materiales en millones, pero hasta la fecha las cifras son meras estimaciones oficiales de poca confiabilidad.

Si antes del *Sacudón* las instituciones encargadas de regular la vida social y política habían mostrado debilidades y eran por ello cuestionadas, a partir de entonces esta situación se profundizó y algunas, como los partidos y sindicatos, entraron en un declive indetenible. Puestas al descubierto sus flaquezas en el cumplimiento de las funciones de mediación, en adelante no dieron señas de rectificar sus conductas, ni supieron encontrar respuestas a las vicisitudes de recesión económica y empobrecimiento que vivía cada vez mayor número de familias. En tal contexto su deslegitimación se hizo inevitable. Quizás fue más grave aún en este proceso la escasa disposición que después de los sucesos mostraron el gobierno de Pérez y las élites políticas en general para negociar algunas concesiones con los distintos sectores sociales afectados por los ajustes. Ello habría contribuido a un cambio de conciencia entre los sectores populares, una percepción colectiva del presente y del futuro que era distinta a la hasta entonces prevaliente<sup>4</sup>. El nuevo discurso oficial, moldeado por ideas de la doctrina neoliberal, hacía ver que los sectores social y políticamente más débiles se quedarían a la intemperie frente a las fuerzas del mercado. Este discurso era radicalmente distinto al industrialista y populista del Estado en el pasado inmediato y frustraba las expectativas de un futuro mejor para estos sectores y sus descendientes.

A partir de entonces los diversos sectores de la sociedad venezolana salieron cada vez en mayor número a la calle a vocear sus quejas, a exigir sus derechos, a dibujar sus aspiraciones. Las miles de protestas que se escenifican en las calles del centro de Caracas y en algunas de las capitales de las entidades federales de la república a lo largo de estos diez años dan fe del esfuerzo que hacen distintos grupos sociales porque su voz alcance a ser escuchada por los actores con poder.

### **Naturaleza, formas y actores de la protesta**

Desde el *Caracazo* se produce una creciente visibilidad de movilizaciones de naturaleza confrontacional y violenta que contrastan con las protestas de

naturaleza convencional que se practicaron asiduamente en los años anteriores. Las protestas confrontacionales se caracterizan por generar sorpresa, tensión y sentimientos de amenaza en el adversario y los no participantes sin llegar al uso de la violencia (Lander et al., 2000). Muchas veces corresponden a formas de protesta ilícitas dentro de las normas venezolanas, como cierres de vías, tomas de establecimientos públicos y marchas o concentraciones que no han sido informadas con antelación a las autoridades; pero a veces, una acción como el desnudo público, o el lanzamiento de ratas azules a las autoridades, por mencionar algunas estrategias de la protesta estudiantil de estos años, convierte una protesta convencional en confrontacional y le da una mayor efectividad para difundir su mensaje y/o alcanzar sus metas (Cuadro 2 y 3). La protesta confrontacional prolifera hasta la actualidad dándole esa turbulencia social que parece caracterizar la vida cotidiana en Caracas y otras ciudades del país. Igualmente, las protestas de naturaleza violenta, que son aquellas que por su forma o resultados implican daños a bienes y/o a la integridad física de las personas, alcanzaron magnitudes proporcionales cercanas a la tercera parte de las reseñas registradas por el diario *El Nacional* en estos diez años, en contraste con años previos cuando no alcanzaban la décima parte de las reseñas (Cuadro 3). La protesta violenta fue especialmente destacada durante los años de la crisis política entre 1992 y 1994 y hasta 1996, notándose una tendencia a la baja a finales del período del presidente Caldera (id.).

Cuadro 2

**Visibilidad de la protesta en Venezuela según sus formas  
(reseñas aparecidas en *El Nacional*) 1985-1999**

Año	Marchas	Cierre de vías	Tomas e invasiones	Disturbios	Quemas	Saqueos
1985	12	1	16	6	3	0
1986	10	2	8	4	1	0
1987	21	3	2	27	16	6
1988	13	5	6	16	4	3
1989	24	13	18	39	11	26
1990	22	4	4	29	7	7
1991	11	3	3	29	16	4
1992	10	12	10	44	18	10
1993	21	13	10	50	26	16
1994	25	30	21	61	29	13
1995	27	15	14	42	18	9
1996	28	29	17	69	25	16
1997	21	18	7	21	12	1
1998	23	20	1	18	0	0
1999	38	56	26	49	8	5
<b>Total</b>	<b>305</b>	<b>224</b>	<b>163</b>	<b>504</b>	<b>194</b>	<b>116</b>

Fuente: Base de Datos *El Bravo Pueblo*, 2000.

Cuadro 3  
**Visibilidad de la protesta popular según su naturaleza  
 (reseñas aparecidas en *El Nacional*) 1985-1999**

Año	Convencional	Confrontacional	Violenta	Total
1985	206	41	15	<b>262</b>
1986	51	16	3	<b>70</b>
1987	36	15	32	<b>83</b>
1988	70	17	16	<b>103</b>
1989	75	85	53	<b>213</b>
1990	39	54	30	<b>123</b>
1991	8	36	31	<b>75</b>
1992	13	56	64	<b>133</b>
1993	52	64	58	<b>174</b>
1994	49	65	73	<b>187</b>
1995	64	62	63	<b>189</b>
1996	53	122	98	<b>273</b>
1997	81	44	50	<b>175</b>
1998	77	67	22	<b>166</b>
1999	43	239	72	<b>354</b>

Fuente: Base de Datos *El Bravo Pueblo*, 2000.

La naturaleza y formas específicas de la protesta popular que se generalizan en la década guardan una relación muy estrecha con el proceso de deslegitimación de las organizaciones sindicales y gremiales ocurrido desde finales de los ochenta, con el consiguiente proceso de desinstitucionalización del sistema de partidos. El vacío dejado por el debilitamiento de estas instituciones de representación y mediación ha impulsado la aparición de actores de emergencia, algunos existentes pero de bajo perfil en las décadas anteriores, otros nuevos, otros que en el pasado habían estado sujetos a las directrices y recursos de los partidos del sistema político. La poca organización y los escasos recursos de que disponen las más de las veces estos actores contribuyen a la cualidad de las formas de protesta. Se buscan modalidades con la mayor efectividad posible a partir de los menores recursos. Trancar una arteria neurálgica del transporte capitalino, tomar un edificio público, encadenarse, hacer una fogata, desnudarse, hacer una huelga de hambre, quemar cauchos, son estrategias relativamente fáciles de organizar y baratas de sufragar para actores que carecen de otros medios para ser atendidos: recursos, contactos, redes, etc. Estas formas de protesta son efectivas en la medida en que rompen la rutina diaria de miles de vecinos de las ciudades, obligando a las autoridades a intervenir, y/o captando el interés de los medios de comunicación (Cuadro 4).



**Cuadro 4**  
**Diversas formas de la protesta venezolana 1989-1999**

Lícitas	Ilícitas	Nuevas
Asambleas	<i>Aceptadas:</i>	Apagones de luz
Caravanas	Huelgas de hambre	Cacerolazos
Comunicados	Operación morrocoy	Cadenas humanas
Concentraciones	Paros cívicos	Encadenamientos
Huelgas	Paros nacionales	Pitazos
Marchas		Desnudo
Mítines	<i>Circunstancialmente aceptadas:</i>	
Recolección de firmas	Cierre de vías	
	Invasiones a inmuebles	
	Invasiones de tierras	
	Tomas de establecimientos	
	<i>Reprimidas:</i>	
	Apedreamientos	
	Disturbios	
	Quemas	
	Saqueos	
	Secuestros	

Fuente: Base de Datos *El Bravo Pueblo*, 2000.

La mayoría de los protagonistas de estas protestas son actores de los más diversos orígenes e intereses que tienen en común la pobreza material de sus miembros, y/o la escasa capacidad de llegar a los espacios donde las decisiones están siendo tomadas. Sus organizaciones tienen variado grado de solidez y consolidación. Son asiduos practicantes de la política de la calle los buhoneros, un sector en ascenso numérico desde la década del ochenta en virtud de la pérdida de los puestos de trabajo en el sector formal de la economía; los jubilados y pensionados, amplio sector proveniente principalmente de los empleados públicos, que vieron sus pensiones y jubilaciones llegar a niveles irrisorios por la continua y gigantesca devaluación monetaria que se ha dado desde 1982; los vecinos de los sectores medios o barriales de las grandes ciudades, cada vez más necesitados de servicios básicos como agua, vivienda o seguridad personal; los choferes del transporte colectivo, agobiados por la inseguridad en las vías públicas y el encarecimiento de los repuestos de sus vehículos; los empleados del sector judicial, sanitario o educativo del sector público, con salarios en continuo decrecimiento por la inflación e infraestructuras poco menos que colapsadas; los desempleados; los policías; y los estudiantes de liceo y universitarios, que han sufrido una continua merma del presupuesto para la educación y consiguientemente el deterioro de las instalaciones donde estudian y de la calidad de la enseñanza. Este último actor se distingue de los demás en que tiene una larga experiencia en la política de la calle y una importante vocación política, lo que le ha servido para orientar y movilizar a otros sectores.

Estos y otros muchos actores, también con variados grados de organización, que a lo largo de estos últimos años se han volcado a la calle en un esfuerzo por abrir los caminos para la comunicación entre Estado y sociedad, constituyen la parte más significativa de la sociedad civil venezolana que entra al siglo XXI. Con cifras de pobreza que en 1986 ubicaban en un 38,88% el total de familias venezolanas en esa situación y que para 1997 suben hasta un 48,3% –las cifras de pobreza extrema crecen entre esos mismos años desde 17,6% a 27,6% (IESA, 2000)– sus organizaciones, que representan mayoritariamente diversos sectores de esos pobres, trabajan afanosamente por su inclusión social en el arreglo hegemónico que a fines de siglo se encuentra en plena construcción.

### **1999: una nueva intensificación de la protesta**

Desde 1998 avanza hacia el predominio político en Venezuela una alianza de fuerzas conocida como el Polo Patriótico, a cuya cabeza se encuentra el actual presidente Hugo Chávez Frías. Entre noviembre de 1998 y diciembre de 2000, período en el cual se desarrolló esta investigación, siete comicios electorales y una nueva constitución proporcionaron a esta alianza una sólida mayoría en los cargos de representación del Estado y una base firme para el desenvolvimiento de su programa político (López Maya y Lander, 2000[b] y 2001).

El año 1999, en el que se realizó la investigación de campo, es el año en el cual Chávez Frías y su alianza debutaron como gobierno. El 23 de enero y el 2 de febrero estas nuevas élites políticas tomaron posesión de cargos en el Congreso Nacional y en el Ejecutivo Nacional respectivamente. En abril el electorado fue a las urnas para votar una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente donde la alianza obtuvo la victoria del sí. En julio los venezolanos volvieron a votar para elegir a los miembros de dicha asamblea; también aquí hubo una victoria avasalladora del Polo Patriótico. En diciembre se aprobó la nueva Carta Magna que éstos elaboraron para el país. Las protestas que presenciamos y trabajamos estuvieron todas atravesadas por la efervescencia política y de participación que estos procesos conllevaron.

Chávez llegó a la presidencia con un discurso crítico hacia los programas de ajuste estructural emprendidos por las administraciones anteriores, a la vez que prometió reformas estatales y la reducción de ciertas instituciones del Estado como los ministerios. En los primeros meses de gobierno hubo una considerable ambigüedad en los aspectos económicos que desarrollaría; no obstante, se produjo una actitud de espera por parte de algunos de los sectores sociales más movilizadas en épocas anteriores, como en el caso de los jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Algunas de las protestas posteriores de este actor fueron cubiertas por nosotros y sirven de base al capítulo sobre su marco de acción colectiva. Con todo, la presencia de numerosas protestas de otros actores desde enero no dejó de revelar la inquietud popular en la transición que se estaba produciendo, sus percep-

ciones en torno a la nueva administración y las expectativas que las acompañaban. Revisemos algunos eventos apoyados por material hemerográfico y nuestras notas etnográficas.

En la semana anterior a la toma de posesión del Presidente, por ejemplo, se registraron varios actos de repudio a la administración saliente: dos a los que asistimos fueron en repudio al saliente ministro de Educación por sus políticas en materia de educación superior. En estos actos los manifestantes rechazaron los recortes de presupuesto a la educación superior y la falta de un plan coherente de reforma. También los empleados del sector salud organizaron un paro laboral de 24 horas en protesta por las deudas no honradas por el gobierno saliente con ese sector.

Es de destacar que casi inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo Presidente se produjo una ola de invasiones de terrenos y edificios desocupados por parte de personas necesitadas. Esto generó una polémica en los medios de comunicación en relación con la imagen que se daba de Venezuela como un país sin estado de derecho. Sin embargo, la administración de Chávez anunció reiteradamente que no iba a permitir que las fuerzas de seguridad desalojaran a los invasores por la fuerza, y que tampoco concedería títulos a los invasores, lo que, combinado con promesas de nuevos planes de vivienda, hizo que los invasores se retiraran lentamente. Este resultado constituyó uno de los primeros aciertos del gobierno entrante, pues en el pasado estas manifestaciones habían sido con frecuencia agresivamente reprimidas generando violencia y pérdidas materiales y humanas. Así mismo, pudo enviar señales positivas para que otros grupos salieran a la calle.

La gran popularidad del Presidente a lo largo del año, evidente en los comicios y encuestas, prácticamente lo eximió de convertirse en blanco de las protestas. Más bien por el contrario, como veremos en los distintos capítulos de este libro, su figura fue contrastada con autoridades y funcionarios que no cumplían con sus obligaciones por varios de los protagonistas de las protestas. Cabe destacar que ese año el Palacio de Miraflores se convirtió en el lugar preferido para las diversas manifestaciones: durante las primeras semanas de la administración se formaban largas colas de personas –algunas de las cuales venían desde el interior del país– que esperaban para hablar personalmente con el Presidente sobre sus problemas y pedir su resolución. Las peticiones podían variar desde la solicitud de apoyo para un proyecto comunitario de algún pueblo en el interior, hasta la petición de ayuda para un medicamento por un pariente enfermo. El traslado de las protestas a Miraflores en los primeros meses, cuando antes lo usual era que llegaran a la sede del Congreso, ponía en evidencia que muchos actores estimaban, no sin razón, que la capacidad de decisión del sistema político se había concentrado en la cabeza del Ejecutivo. Así, si bien el Presidente no era el blanco de las protestas, los actores se dirigían a él en busca de comprensión y decisiones.

La popularidad del Presidente y la movilización de sus redes de apoyo generaron una política callejera intensa a lo largo del año. A mediados de abril, por ejemplo, hubo una semana ajetreada alrededor de la aprobación de la Ley

Habilitante en el Congreso<sup>5</sup>. Cuando el Congreso aprobó una versión de la ley que el Ejecutivo Nacional no aceptó, por lo que la devolvió para su reconsideración, grupos del *Movimiento Bolivariano 200* (MBR-200) y del *Movimiento Quinta República* (MVR), organizaciones políticas del gobierno, con boinas rojas, pancartas y banderas de Venezuela, tomaron las puertas del Congreso exigiendo que aprobaran la ley como la quería el Presidente (*El Nacional*, 14-04-1999: D-1). Esta protesta se tornó violenta cuando algunos manifestantes agredieron a congresistas del partido Acción Democrática (AD) que salían del edificio, lo que generó otra manifestación de militantes de AD en contra de militantes de ese partido. Se creó el peligro de un enfrentamiento entre ambos bandos, que la policía antimotines tuvo que prevenir manteniéndolos separados por la fuerza. Las fuerzas pro-Chávez estuvieron movilizadas durante toda la semana, con una marcha dos días después de la toma y una caravana durante el fin de semana.

Otro choque más violento entre militantes del MVR y sus adversarios del partido AD se produjo a fines de agosto cuando el Congreso llamó a una sesión extraordinaria y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que venía sesionando en el Palacio Legislativo, le negó el derecho a usar las instalaciones. Esto resultó en la dramática invasión del Palacio por parte de algunos congresistas de los partidos tradicionales, escalando para ello la cerca que lo resguarda. Esta imagen alcanzó una difusión internacional. Militantes de AD y, en menor medida, del partido socialcristiano Copei, se concentraron en la plaza Bolívar y del lado este del Palacio Legislativo para protestar, lo que produjo numerosos choques entre ellos y los *emeverristas*, incluyendo el saqueo de una caseta bajo la dirección del alcalde Antonio Ledezma de afiliación *adeca*. La policía y la Guardia Nacional intervinieron dispersando a los manifestantes con bombas lacrimógenas (*El Nacional*, 28-08-1999: D-1). Por su parte, en el lado oeste del Palacio se concentraron los militantes del MVR para manifestar apoyo a la ANC. Esta manifestación incluyó numerosos discursos triunfalistas de diputados “constituyentistas” parados encima de los carros. Hubo enfrentamientos y algunos manifestantes tenían tubos y palos. El choque entre *emerrevistas* y *adecos* esos días alcanzó un saldo de más de cuarenta lesionados por traumatismo y cuadros de asfixia –entre militantes, parlamentarios y periodistas– y fue negativo para el gobierno en el contexto internacional pues las imágenes televisadas produjeron condenas de distintos países y organizaciones.

Este conflicto entre un MVR potenciado por la presidencia de Chávez y los partidos tradicionales, sobre todo AD, tratando de conservar su poder, se expresó en varios conflictos durante todo el año. Por ejemplo, en abril, la Federación Médica Venezolana, tradicionalmente controlada por AD, lanzó un paro por el vencimiento del contrato colectivo sin que se vislumbraran a la fecha los acuerdos para su renovación, y para ejercer presión contra la posibilidad de que el gobierno contratara médicos cubanos. Dentro del Área Metropolitana, sólo el Colegio de Médicos del Municipio Sucre participó en el paro, pues el Colegio de Médicos del Distrito Federal adversaba a la directiva de la federación nacional y alegaba que era un juego político para llevarle la contraria

al nuevo gobierno. En septiembre el enfrentamiento se repitió cuando simpatizantes del MVR, en apoyo al doctor Fernando Bianco en las elecciones nacionales de la Federación, declararon el proceso fraudulento y exigieron su repetición (*El Nacional*, 22-09-1999: C-2). Igualmente hubo tensiones entre ambos bandos durante la tradicional marcha del Primero de Mayo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) que está dominada por el sindicalismo afín a AD. En la plaza de La Candelaria se dio una marcha trabajadora alternativa, que cubrimos para esta investigación y cuyos participantes nos hicieron clara su simpatía por el Presidente. También hubo protestas organizadas por AD, como la marcha de las gobernaciones y municipios en septiembre, exigiendo los recursos atrasados y el respeto al proceso de descentralización iniciado en los años anteriores. En cambio, activistas del MVR y otros partidos del Polo Patriótico trabajaron con sectores no organizados como los vecinos de Hoyo de la Puerta y los buhoneros nocturnos de Petare, llevándoles a protestar por sus derechos.

Alrededor del proceso de elección popular de los representantes a la Asamblea Constituyente, la fijación de una agenda de trabajo de la Asamblea, y el debate y redacción de una nueva constitución, hubo protestas de toda índole. El centro de la ciudad de Caracas fue testigo de una movilización permanente de sectores sociales que querían asegurarse de que sus preocupaciones e intereses quedaran incluidos en la Carta Magna en redacción. En julio, por ejemplo, hubo manifestaciones de grupos de músicos, campesinos, niños, mujeres, estudiantes, entre otros. Los estudiantes universitarios querían participar en la Asamblea; esta protesta forma parte del grupo de protestas estudiado aquí en la parte relativa al marco de acción colectiva de los estudiantes universitarios. Uno de los grupos más activos en su inclusión fueron los indígenas, pues hubo particular dificultad sobre el proceso de selección de sus candidatos; una comisión indígena que se reunió en el complejo turístico de Los Caracas (estado Vargas) designó quiénes representarían al sector, lo que motivó protestas de quienes se sintieron excluidos, entre ellas una toma de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante las sesiones de la Asamblea Constituyente varios temas impulsaron manifestaciones. Entre las más visibles estuvieron las lideradas por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica que abogaba por la inclusión en la nueva constitución de un artículo que asegurara la ilegalidad del aborto en Venezuela; procesiones y un llamado a votar en contra de la nueva constitución no lograron modificar la opinión del constituyente ni de la mayoría del electorado, y el contenido del artículo sobre el derecho a la vida quedó en esencia igual a la Constitución de 1961.

Además de estos blancos tan políticos, la protesta se ha dirigido a otros, concretos y de mayor contenido social. Fueron frecuentes las protestas dirigidas contra instituciones y funcionarios específicos cuya labor era considerada deficiente. Proliferaron protestas que exigían el cumplimiento de acuerdos estipulados en los contratos colectivos o el pago de deudas pendientes. Los empleados públicos de distintos sectores (educación, salud o el judicial) se movilizaron en diversas ocasiones por estos motivos. Algunas de las protestas de los empleados del Poder Judicial en contra del Consejo de la Judicatura fue-

ron cubiertas por nosotros y sustentan el capítulo sobre el marco de acción de los trabajadores tribunalicios. Así también, grupos de vecinos no dejaron de movilizarse a lo largo del año por problemas de tenencia de la tierra, falta de servicios básicos, falta de pasarela y otros, siempre presentes y no resueltos por las autoridades de turno. Este año algunos de estos grupos percibían una solidaridad del Presidente, lo que les dio más ímpetu. Aquí también seleccionamos a este actor para analizar su marco de acción colectiva.

Uno de los problemas más álgidos que confrontó el nuevo gobierno este año fue la movilización de los buhoneros. En el sector de la economía informal se conjugaron varios factores que lo hacían especialmente explosivo: por un lado, el alto índice de desempleo, cerca del 12% al iniciarse el año, con casi el 48% de la población económicamente activa en este sector, muchos ejerciendo la buhonería. Por otro lado, las principales alcaldías del Área Metropolitana de Caracas estaban en manos de la oposición, hecho éste que dio un nuevo ímpetu a los alcaldes en el impulso de cambios en sus municipios en relación con los buhoneros, tanto para adelantar sus aspiraciones políticas como para enfrentarse al gobierno central. Los trabajadores de la buhonería, por su parte, casi exclusivamente provenientes de los sectores de bajos recursos, apoyaron a Chávez en las elecciones y, esperanzados, sentían tener su respaldo. Tanto en el Municipio Libertador como en el Municipio Sucre, en varias ocasiones se sucedieron enfrentamientos importantes entre los buhoneros y las autoridades. Algunas de estas protestas fueron cubiertas en nuestro trabajo de campo y utilizadas para el análisis del marco de acción colectiva de los buhoneros.

El fenómeno de *los disturbios* protagonizados por estudiantes *y/o encapuchados*, que venía disminuyendo desde 1998, tuvo un incremento este año, cuando la prensa registró algunos eventos de esta naturaleza en las áreas adyacentes a algunos liceos como el Andrés Bello en enero y posteriormente en el segundo semestre del año en diversos lugares de la capital (*El Nacional*, 14, 21 y 23-01-1999 y en los meses de junio-julio, noviembre y diciembre)<sup>6</sup>. La disminución el año anterior de estas protestas cerca de la Universidad Central de Venezuela (UCV) pudo tener que ver con varios factores, entre ellos una acción tomada por el rectorado que realizó un referéndum interno sobre los encapuchados, cuyos resultados señalaron el rechazo de la comunidad universitaria a tal forma de protesta. Si bien este fenómeno ha tendido a debilitarse en las universidades, ha permanecido entre los liceístas<sup>7</sup>. En nuestro trabajo de campo cubrimos diversas protestas de estudiantes con distintos niveles de confrontación o violencia. Para este libro analizamos el marco de acción de los estudiantes universitarios con la información proporcionada por las protestas pacíficas que cubrimos.

Aparte de algunos incidentes aislados, fue notoria durante este año la disminución del uso de la violencia por las fuerzas de seguridad en contra de las protestas a pesar del aumento significativo de éstas. En su informe de fin de año, Provea constató un total de 665 manifestaciones entre febrero y septiembre de 1999 de las cuales sólo 21 fueron reprimidas, el índice más bajo registrado en los últimos cinco años (Provea, 2000: 87). En el informe siguiente

(que va desde octubre de 1999 a septiembre de 2000), con un número aproximado de 316 protestas entre octubre y diciembre de 1999, Provea volvió a corroborar esta tendencia para estos meses y también para las protestas de los primeros ocho meses del año 2000 (Provea, 2001).

Un año de intensa movilización, alta politización de la misma, asiduidad en el uso de formas confrontacionales y una actitud oficial de mayor tolerancia que en el pasado son en resumen los aspectos más destacados de la protesta popular de 1999. Corresponde ahora que focalicemos en la concepción teórica y metodológica de la investigación que servirá para completar para el lector las referencias necesarias para comprender los marcos de acción colectiva que desarrollamos en los siguientes capítulos.